

HISTORIA LABORAL: ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

ENTIDAD CONSULTANTE:

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS

CONSULTA:

"(...) si la información contenida en el Registro de Historia Laboral cuyo carácter de información reserva ha sido establecido en la Ley de Seguridad Social, puede ser entregada a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en base a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (...)"

BASES LEGALES:

Constitución de la República del Ecuador Art. 66 num. 19.

Ley Orgánica de Salud Art. 7 lit. f).

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional Art. 47.

Ley de Seguridad Social Arts. 244 y 247.

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Art. 17.

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos Arts. 2, 4, 22, 23 y Disp. Trans. Séptima.

Código Penal Art. 282.

PRONUNCIAMIENTO:

A fin de contar con mayores elementos de análisis sobre el tema materia de consulta, mediante oficio No. 08701 de 6 de julio de 2012, este Organismo requirió el criterio institucional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, lo que fue atendido con oficio No. 000675-DN-DINARDAP-2012 de 20 de julio de 2012, ingresado el 23 de julio del presente año.

El informe jurídico del Procurador General del IESS, contenido en oficio No. 64000000-2066 TR69207 de 29 de junio de 2012, que se ha acompañado a la consulta cita, entre otras normas, el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República que reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la protección de datos de carácter personal.

El Procurador Síndico del IESS invoca además, los artículos 244 y 247 de la Ley de Seguridad Social, los cuales determinan que la información que se debe incluir en el

“Registro de Historia Laboral del Asegurado”, y que la califican como reservada; y, por otra parte, la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Registro de Datos Públicos, que ordena a las instituciones del sector público, entre ellas al IESS, a integrarse al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos e interconectarse con dicho Sistema.

Sobre dicha base normativa, el Procurador General del IESS, argumenta que:

“El Art. 247 de la Ley de Seguridad Social establece que la información de la historia laboral del asegurado es reservada, cuyo quebrantamiento de la prohibición de revelar los datos contenidos en ella será sancionado con arreglo al Código Penal. Sin embargo de ello la información podrá darse a conocer de conformidad con la Ley, a los tribunales y jueces competentes, así como a petición del afiliado (...).

Por lo expuesto señor Director, esta Procuraduría General considera, que toda información que no forme parte de la historia laboral o de la historia clínica de los asegurados y esté a cargo del Instituto, si puede ser concedida sin restricción alguna”.

Por su parte, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, en el oficio No. 000675-DN-DINARDAP-2012 de 20 de julio de 2012 al que se hizo referencia en los antecedentes de este pronunciamiento, se refiere al derecho de protección de datos de carácter personal que establece el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República, y expone que:

“Debemos resaltar, que la norma con supremacía jerárquica en nuestro país determina que por mandato de la ley, en este caso la del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, estos datos pueden ser difundidos a través del mismo sistema que crea la esta norma en su artículo primero y que regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, tanto en las entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros; es decir también regula a las bases y registros de datos públicos que mantiene a su cargo el IESS. Esto, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información propendiendo a lograr la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías (...).”.

Añade que: “Es por demás necesario, resaltar que en el informe jurídico realizado por la Procuraduría General del IESS, se confunde la información pública personal, con el registro de dato público (...).”.



nitroPDF

professional

descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional

Creado con



nitroPDF

professional

descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional

Agrega que:

"La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos expresa en sus artículos 22 y 23 que la DINARDAP se encargará de organizar un sistema de interconexión cruzado entre los registros público y privado que actualmente (como es el caso del IESS) o en el futuro, administren bases de datos públicos, para lo cual creará un sistema informático que tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los registros (...) lo cual ha sido materializado con la conformación de la Ficha Única de Registros Públicos del Ciudadano, visualizada a través del portal www.datoseguro.gob.ec.

Por tanto, las entidades a las que la ley manda a interconectarse, con la finalidad de prestar servicios eficientes y eficaces para los ciudadanos, no pueden ser ajenas a este proceso, ya que la falta de información verás podría devenir en que el ciudadano no goce en su plenitud de sus derechos constitucionales".

Respecto del registro de historia laboral del asegurado en el IESS, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, manifiesta que dicha información "es de propiedad del ciudadano y un registro de dato público por esencia y el IESS la entidad de registro y por ende el custodio de esta".

Concluye el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, manifestando lo siguiente:

"Por las exposiciones jurídicas y legales expuestas en el presente y con la finalidad de coadyuvar con la entidad a su cargo para el cabal cumplimiento de la Constitución de la República y la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, me permito exhortar a usted a fin de que la entidad a su cargo, inicie el proceso de interconexión e interoperación de las bases de Registro de Datos Públicos que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social".

El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, en los siguientes términos:

"El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley".

La materia sobre la que versa la consulta, se refiere a la aplicación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que prescribe:

"SEPTIMA.- Las instituciones del sector público que posean información pública como: el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Nacional de Migración, Dirección Nacional de Tránsito, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Municipios, Función Judicial, entre otras, deberán integrarse paulatinamente al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos dentro del plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. En caso de que cualquier institución que estuviese en la obligación de interconectarse en virtud de la presente Ley, no lo hiciere, la máxima autoridad de la referida institución podrá ser destituida por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos".

Del tenor de la norma transcrita se desprende que, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido expresamente incluido entre aquellas instituciones del sector público que poseen información pública, y que están sujetas a la obligación de interconectarse con el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Su consulta exige considerar la finalidad, objeto y ámbito de aplicación de la citada Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, reglados por los artículos 1 y 2 de ese cuerpo normativo. El artículo 1 de la Ley en mención dispone:

"Art. 1.- Finalidad y Objeto.- La presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros.

El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías".

De conformidad con el artículo 2 de la misma Ley, su ámbito de aplicación incluye a las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para los usuarios de los registros públicos.

El inciso primero del artículo 4 de la misma Ley de Registro de Datos Públicos prevé que las instituciones del sector público y privado y las personas naturales

Creado con

 **nitro**PDF professional

descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional

Creado con

 **nitro**PDF professional

descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional

que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información.

Como se observa, de la norma antes referida, las instituciones que administran o en el futuro administren bases de datos, son responsables de su protección, integridad y control, lo que en el contexto de la Disposición Transitoria Séptima del mismo cuerpo legal, que determina la obligatoriedad de las entidades, entre otras, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de interconectarse e integrarse paulatinamente al Registro de Datos Públicos, permite colegir que tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, tienen la obligación de proveer la debida protección de la información que poseen en sus bases de datos.

Al efecto, corresponde señalar que existen datos de carácter personal que son confidenciales, según el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que prescribe:

"Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado.

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos.

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, de acuerdo al uso que hará de la misma.

y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer.

La Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad”.

Según se observa del mencionado artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la información confidencial o reservada está relacionada con los datos de carácter personal o atinentes a la intimidad personal frente al ámbito público o privado, cuya difusión o uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales. Dicha información confidencial o reservada podrá ser difundida, siempre que exista autorización expresa del titular de la información, mandato de la ley u orden judicial; y en este sentido, se expresa el numeral 19 del artículo 66 antes citado de la Constitución.

El inciso cuarto del mismo artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, determina que la autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información; y, en caso de dicha información sea difundida de manera ilegal, el Art. 282 del Código Penal, prescribe lo siguiente:

“Todo funcionario público que, sin orden legal del superior competente, descubra o revele, algún secreto de los que le están confiados por razón de su destino, o exhiba algún documento que deba estar reservado, será reprimido con uno a cinco años de prisión”.

En concordancia, el inciso tercero del Art. 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referido a la acción de acceso a la información pública, prescribe que: “No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas”.

La protección de la información reservada, consta también establecida por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo

Creado con

 **nitro**PDF professional

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 328 |

Creado con

 **nitro**PDF professional

descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional

cuarto inciso prevé que: "Las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas, un índice de los expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será considerado como información reservada. Este índice de información reservada, detallará: fecha de resolución y período de vigencia de esta clasificación".

En cuanto a la reserva de documentos o de la información, merece considerar que al respecto el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, define al término "reserva" como: "Cautela o cuidado para que algo no se sepa"; y, a la acepción "reservado" como: "Documento que no debe tener difusión fuera del destinatario y personas directamente interesadas; débese a razones militares, políticas, de intereses o por afectar a la moral de las personas".

De ahí que, las entidades que tengan a su cargo bases de datos, tienen la obligación de cuidar su correcta administración frente a terceros, velando para la información cuya difusión o uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales, sólo sea difundida con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

Dentro del contexto general que ha sido previamente analizado, en el caso materia de consulta, el tercer inciso del artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, que se ha invocado en el informe del Procurador General del IESS, señala en forma expresa lo siguiente:

"La información de la historia laboral del asegurado es reservada. El quebrantamiento de la prohibición de revelar los datos contenidos en ella será sancionado con arreglo al Código Penal".

El artículo 244 de la citada Ley de Seguridad Social, prevé que el Registro de Historia Laboral del Asegurado comprenderá la siguiente información:

- a. Datos personales del asegurado;
- b. Datos de los familiares dependientes del asegurado;
- c. Fecha de ingreso al Seguro General Obligatorio;
- d. Tiempo de servicios, remuneración imponible y aportes pagados por cada empleador, que serán declarados por éste o por iniciativa del propio afiliado o por comprobación del IESS, de conformidad con las reglas de aplicación de éste Título; y,

e. En el caso del asegurado sin empleador, aquellos servicios y remuneraciones imponibles por los que haya cotizado o cotizare, dentro de los límites que establecerá la reglamentación”.

Atenta la referencia que ha efectuado el Procurador General del IESS, a la historia clínica de los asegurados, resulta pertinente considerar que, la letra f) del artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud, declara confidencial la información contenida en la historia clínica de las personas. Dicha norma, dispone:


“Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes derechos:

(...) f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis”.

De las normas que se han citado se desprende que, uno de los objetivos del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, de conformidad con el artículo 1 de la Ley que lo rige, es regular el acceso a la información pública de carácter personal que reposa en las entidades públicas o privadas; al efecto, la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, prevé que las instituciones públicas a las que dicha norma se refiere, entre las que se incluye al IESS, se integren paulatinamente al sistema en un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia de esa Ley.

Respecto de la información reservada prevista en los artículos 66 numeral 19 de la Constitución de la República y 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, tal como manifesté anteriormente, dicha información está referida a datos personales o íntimos frente al ámbito público o privado, cuya difusión o uso público puede afectar o atentar contra los derechos humanos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales.

El Art. 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, establece las excepciones al derecho a acceder a la información pública y, entre ellas, la contenida en la letra b) que se refiere a: “Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en las leyes vigentes”, de lo que se desprende que terceros no tienen derecho a acceder a información que la Ley ha determinado como reservada, en este caso, a la historia laboral del asegurado, que por disposición del artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, tiene el carácter de reservada y que incluye los datos determinados en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.

Creado con
 **nitro**PDF professional

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 331 |

Creado con
 **nitro**PDF professional
descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se debe aclarar que la reserva frente a terceros no representa una reserva para entidades que, por mandato legal, deben acceder a información que la Ley ha calificado como reservada, como es el caso de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entidad que administra el Registro de Datos Públicos, al que según la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, deberán integrarse paulatinamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las demás entidades que allí se señalan, dentro del plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia de esa ley. En consecuencia, esta facultad otorgada por la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, implica que dicha Dirección se constituya en custodio de información reservada y le acarrea la responsabilidad de protegerla frente a terceros.

Por lo expuesto, de conformidad con la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, por la cual el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras instituciones del sector público, que posean información pública deben integrarse al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, se concluye que la información contenida en el "Registro de Historia Laboral" del IESS debe ser entregada a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, cuya confidencialidad y reserva frente a terceros, deberá mantenerse bajo su responsabilidad, salvo que exista autorización expresa del titular de la información, mandato de la ley u orden judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley antes referida y el inciso tercero del artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, para que proceda su difusión al público.

OF. PGE. N°: 09859, de 21-09-2012

IMPUESTO DE PATENTE: DOMICILIO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENTIDAD CONSULTANTE:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

CONSULTA:

"¿Es requisito sine qua non para ser considerado como sujeto pasivo del Impuesto de Patente tener domicilio y actividad económica permanente dentro de la jurisdicción cantonal donde se genera la obligación tributaria o se puede considerar como sujeto pasivo del impuesto antes referido a las personas naturales y/o jurídicas que tengan actividades económicas eventuales, ora sea dentro de la jurisdicción cantonal?"

Creado con

 **nitro**^{PDF} **professional**
descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional